

**TENSIÓN ENTRE LA FRAGMENTACIÓN DEL ESPACIO SOCIAL Y  
LA INTEGRACIÓN NACIONAL EN EL ESTADO FEDERAL  
CANADIENSE**

**GÉRARD BOISMENU  
ET PETER GRAEFE**

Département de science politique  
Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS)  
Université de Montréal

**CAHIERS DU CPDS  
No 03-03**

Avril 2003

Primer Seminario anual internacional sobre integración panamericana

Centro de estudios argentino-canadienses

Buenos Aires. 16 novembre 2000

## **TENSIÓN ENTRE LA FRAGMENTACIÓN DEL ESPACIO SOCIAL Y LA INTEGRACIÓN NACIONAL EN EL ESTADO FEDERAL CANADIENSE**

**G rard Boismenu y Peter Graefe**

**Universit  de Montr al**

La fragmentaci n del espacio social canadiense es un tema central de las tensiones y conflictos pol ticos en Canad . La construcci n del espacio canadiense s lo ha sido posible por medio de la postergaci n de la resoluci n de varios problemas regionales y nacionales. El espacio social es un fen meno cambiante que se define en funci n de los retos (y de su representaci n) a nivel econ mico, pol tico y social. Aun cuando la coincidencia entre los diversos retos no es un elemento necesario, su ausencia puede convertirse en un factor agravante de la situaci n regional. Uno de los elementos que deben ser tomados en consideraci n al abordar este tema, es la distinci n entre el espacio canadiense, fuertemente ligado al  rea geogr fica continental ocupada por Canad , y los espacios regionales. Puesto que el espacio canadiense incluye y sobrepasa los regionales, esta perspectiva nos permite comprender e interpretar sistemas de acci n y de representaci n diferentes. Con sus altibajos, la constituci n del espacio canadiense, en sus dimensiones econ mica, pol tica y social, es un tema presente a lo largo de la historia de este pa s. En ese sentido, la globalizaci n y la acentuaci n de la integraci n continental renuevan esta problem tica y replantean las interrogantes (y las posibles respuestas) en nuevos t rminos. Por ello, y aunque de forma general, abordaremos este tema, poniendo el acento en la diferenciaci n entre el espacio y el r gimen pol tico.

El estudio de la articulaci n entre la globalizaci n, por un lado, y el federalismo canadiense, por el otro, nos permite identificar tres elementos centrales. En primer lugar, la globalizaci n replantea la problem tica de la fragmentaci n del espacio econ mico y del regionalismo. Espec ficamente, el regionalismo se presenta de forma diferente en un cierto n mero de espacios

provinciales, con la actualización de proyectos socioeconómicos. En segundo lugar, el tema de la fragmentación se manifiesta en las relaciones intergubernamentales y en la evolución del federalismo. El tema, que va más allá de las reivindicaciones regionales de los años setenta que hicieron fracasar los mecanismos de cooperación federal, conduce, en la coyuntura actual, a la búsqueda de una fórmula de "federalismo funcional". A partir de esta constatación, podemos afirmar, como tercer elemento, que la federación es un punto de confrontación de proyectos opuestos con respecto a la deficiencia de lo que debería ser el "federalismo funcional", en un espacio económico y social cada vez más fragmentado. Así, este documento analizará los tres principales proyectos político-institucionales vigentes actualmente. Su confrontación se manifiesta día tras día, en los debates que se desarrollan en torno a los roles y actividades apropiadas que cada uno de los dos niveles de gobierno deberían cumplir.

### **Globalización y la fragmentación del espacio económico**

Un breve vistazo de la problemática que nos ocupa es suficiente para formular, de primera entrada, dos observaciones generales. Por un lado, es un cliché hablar del debilitamiento del Estado central, de transferencias de poder hacia instituciones supra-nacionales, la sociedad civil y, particularmente, el mercado (ver Jessop, 1997; Keating, 1998; Hollingsworth y Boyer, 1997). Al respecto, se debe señalar que existe una serie de procesos económicos, íntimamente relacionados, que han aumentado la "permeabilidad" de las economías nacionales (Jenson, 1995). Esta situación debilita la capacidad del Estado para implementar estrategias económicas más intervencionistas. Del mismo modo, las políticas sociales, que han sido desplazadas a nombre del crecimiento de las inversiones y de la reducción de la fardo fiscal, también se han visto debilitadas. De hecho, iniciativas políticas inscritas a otros niveles del espacio social desafían, directamente, la autoridad del Estado central. Estos retos han sido alimentados por la disminución de la autoridad moral del Estado

nacional, es decir, de su rol de garante de la justicia social y del crecimiento económico (Brown: 1998, 9). En efecto, el aumento de la competencia internacional, así como las limitaciones fiscales, indujeron a la mayor parte de los estados occidentales a distinguir, por un lado, la gestión territorial y, por el otro, la redistribución. Adicionalmente, se impulsaron los principales sectores económicos y las regiones más importantes (Keating, 1998: 73), dejando así de lado los sectores "periféricos". Estas acciones se implementaron con el objetivo de recuperar el terreno perdido en el marco de la economía global (Hueglin, 1989: 210). Las transformaciones en la gestión territorial tienen consecuencias particulares en los estados federales (Boeckelman, 1996). Los mecanismos que regulan los conflictos entre el centro y las regiones, es decir, los instrumentos que mantienen unidos los elementos constitutivos de la federación, podrían dejar de ser funcionales.

Por otro lado, la globalización no se impone de forma autónoma. Por el contrario, es un proceso construido, de múltiples formas, por los Estados, los cuales participan en los tratados de libre comercio y han aceptado el nuevo contexto internacional como una fuerte limitación al accionar político (Théret, 2000: 81-82). Sin embargo, la capacidad de los Estados para reconfigurar sus propias sociedades dentro del modelo neoliberal demuestra que la tesis de la decadencia del Estado debe ser matizada (Haslam, 1999). Por ello, la verdadera interrogante no está relacionada con la debilidad o fortaleza del Estado, sino con sus estrategias y objetivos (Panitch, 1994; Kagarlitsky, 1999: 299-300). Esta dinámica está presente en Canadá, en donde la "aceptación" del contexto mundial se basó en, al menos, dos factores. En primer término, el gobierno federal decidió "entrar en el juego" de la apertura de mercados, con la esperanza de que la liberalización produciría una distribución policéntrica del poder económico, lo cual provocaría, a su vez, una disminución de la dependencia del

país con respecto a los Estados Unidos (Théret, 2000: 87)<sup>1</sup>. En segundo término, la aceptación de las limitaciones inherentes a la globalización, expresa la posición de la élite económica canadiense, la cual privilegia esta estrategia como medio de reestructuración del capital canadiense y como instrumento para aumentar la innovación y la productividad (Panitch 1994; Bradford, 1999; Langille, 1987). Aún cuando el gobierno federal renunció a la utilización del poder económico con fines directivos, este buscó, sin duda alguna, favorecer la movilización de los actores económicos, y de los canadienses en general, en favor de la competitividad económica. Al mismo tiempo, se esforzó por asegurar su liderazgo a lo largo del país, a través de la puesta en marcha de una serie de políticas específicas (Campbell, 1992; Théret, 2000: 91-94)<sup>2</sup>.

Esta opción representa un riesgo mayor, sobre todo al tomar en cuenta las fuertes tendencias de fragmentación inducidas por el libre funcionamiento del mercado, y que son aún más fuertes en el subcontinente norteamericano. La "apuesta" consiste en lanzarse en la corriente neoliberal, con la esperanza de encontrar la estrategia que permitirá al gobierno federal contrarrestar estas tendencias fragmentarias. Tal y como se puede constatar, el desafío no es fácil. En efecto, tal y como varios críticos lo han anticipado (por ejemplo G. Laxer, 1992; McBride et Shields, 1997), la política de liberalización comercial ha profundizado la regionalización de la economía canadiense, fortaleciendo simultáneamente el eje norte-sur. Por ejemplo, la Isla del Príncipe Eduardo es, actualmente, la única provincia canadiense que comercia más con el resto del país que con el resto del mundo. En 1981, sólomente British Columbia, Saskatchewan, New Brunswick y Newfoundland intercambiaban más con el resto del mundo que con el resto de Canadá (Courchene et Telmer, 1998: 278-

---

<sup>1</sup> Esta estrategia refleja una aplicación reciente de la estrategia de "potencia media", en donde se busca contra-balancear una relación bilateral asimétrica por medio del establecimiento de relaciones multilaterales.

<sup>2</sup> Tal y como lo afirma Jessop (1997) y Hollingsworth y Boyer (1997), El Estado-nación posee una importante capacidad de intervención al trabajar en red para movilizar e involucrar a los actores no estatales en diversos proyectos.

279). En el transcurso de esos años, el ratio intercambios internacionales-interprovinciales (en dólares constantes) pasó de 0,87 en 1981 a 1,68 en 1994. Estas cifras indican un crecimiento de más del doble de los intercambios internacionales, mientras que los interprovinciales registraron un aumento de sólo un 15%. Es importante recalcar que la integración norte-sur no se limita exclusivamente a las relaciones comerciales. El acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Canadá y el Tratado de Libre Comercio (TLC) norteamericano pueden ser concebidos como la consolidación de una nueva arquitectura económica en América del Norte, basada en complejas redes de producción y de distribución de bienes a través de las fronteras (Blank, Krajewski et Yu, 1995: 13). Esto significa que las economías regionales están cada vez más "incrustadas" en las complejas redes de producción ligadas a los estados americanos.

A pesar de la voluntad política para implementar políticas pan-canadienses, aún cuando estas puedan provocar una mayor tensión interna, el gobierno federal no ha sido capaz de contrarrestar la fragmentación. Las intervenciones federales pudieron neutralizar las acciones de las provincias (que siguen siendo actores importantes), pero no establecieron un control económico centralizado a lo largo del país. Esta situación puede ser constatada, específicamente, en temas como la política de ajuste del mercado laboral, la capacitación de la mano de obra, el desarrollo regional, el comercio interior, y otros (Haddow, 1998, 2000; Haddow y Sgarpe, 1997; Cameron, 1992; Rocher y Rouillard, 1998; Lazar, 1998b; Bakvis, 1996: 151-152; Milne, 1986; Savoie, 1995; Coulombe, 1998; Brodie y Smith, 1998; Schwartz, 1995: 213; Doern y MacDonald, 1997). El gobierno federal puede aumentar la coordinación de la economía gracias a su competencia en materia de negociación de acuerdos comerciales internacionales. Estos, por su obligatoriedad, usurpan directamente la jurisdicción y las prerrogativas provinciales. Sin embargo, la contribución de dichos acuerdos a la integración económica nacional no es fácil de establecer. En efecto, este tipo de tratados responde más que todo a una lógica continental

norteamericana. Por ello, las estrategias liberales continentales de desarrollo, como el libre comercio, son similares a la estrategia regionalista/"provincialista", sobre todo en lo concerniente a la integración del espacio económico norte-sur (y, al fin de cuentas, del espacio político).

En resumen, el diagnóstico elaborado por el gobierno federal, con respecto a las obligaciones interpuestas por la globalización, específicamente, por las formas neoliberales de la globalización, provocó un efecto paradójico: por un lado, se aumentó la fragmentación del espacio económico canadiense; por el otro, se impulsaron políticas federales tendientes a asegurar un rol federal predominante en la integración de ese mismo espacio. Hasta el momento, todo intento de respuesta política federal ha topado con fuertes resistencias provinciales o no ha sido capaz de contener la fragmentación. Ante esta situación, el gobierno federal se ha visto obligado a redoblar esfuerzos con miras a obtener algún tipo de integración. Dicha acción ha sido posible por medio de las políticas sociales, ámbito en el cual el gobierno federal cuenta con una fuerte legitimidad, especialmente en el Canadá de habla inglesa (Cameron, 1997).

### **El nuevo regionalismo y la ascensión de los estado-región**

La tensión entre la fragmentación económica y la voluntad de centralización sociopolítica del gobierno federal canadiense no es una novedad. El modelo de desarrollo seguido en este país después de la Segunda Guerra Mundial relacionó la lógica de gestión macroeconómica de tipo keynesiana con dos importantes movimientos continentales: las exportaciones de riquezas naturales y la importación de capital. Del mismo modo, se favoreció la regionalización de la economía canadiense, manteniendo simultáneamente la capacidad de conducción del gobierno federal (Jenson, 1989). Sin embargo, las grandes transformaciones de la economía política internacional y de la gestión territorial de los Estados-nación de los últimos veinticinco años, han provocado nuevas presiones que afectan directamente las relaciones entre el centro y las regiones, así como los procesos de demarcación de estas relaciones. A partir de



fines de la década de los ochenta, el regionalismo ha sido influenciado por dos elementos fundamentales (Keating, 1998: 73). En primer lugar, el interfaz entre las regiones y la economía internacional fue reforzado, lo cual explica por qué el regionalismo ya no sea concebido como un fenómeno interno del Estado-nación. En segundo lugar, y consecuencia de los retos de la competencia internacional, el nuevo regionalismo se centra sobre todo en la gestión de este interfaz. En vez de adoptar roles complementarios definidos por una división nacional del trabajo, las regiones se encuentran enmarcadas dentro de una lógica de oposición propia a la noción de libre competencia.

Dicha situación se puede observar, de forma evidente, en el caso canadiense. La opción "intervencionista-provincialista" de los años setenta e inicios de los ochenta (Leslie, 1987: 15, 174-175), en donde la alianza del Estado provincial con el capital privado implementaban estrategias de desarrollo basadas en las riquezas naturales, es un esquema obsoleto ante las estrategias provinciales actuales. ¿Cómo podemos entonces calificar este nuevo regionalismo? Desde hace algunos años, los analistas han comenzado a adoptar el concepto de Estado-región. Dicha término está, hoy en día, en pleno apogeo. Por "Estado-región", se entiende una serie de jurisdicciones que buscan la inserción óptima de una región en la economía internacional (o continental), por medio de la creación de "dependencias no comerciales" (Storper, 1997; Courchene y Telmer, 1998; Wolfe, 1997). Se trata de una construcción económica que implica la creación de una densa red de vínculos entre compañías, gobierno, asociaciones, universidades y centros de investigación, unidos por los mismos símbolos y por una cultura común. El Estado-región también incluye la esfera política, concentrando las demandas sociales y políticas a nivel regional, y apoyándose sobre los sentimientos de ciudadanía y de solidaridad infranacionales (Wolfe, 1997; Cooke, 1998; Latouche, 1998; Courchene y Telmer, 1998; Hollingsworth y Boyer, 1997).

La identificación de provincias específicas a un Estado-región en particular no es un tema esencial en este documento<sup>3</sup>. Desde nuestro punto de vista, es preferible identificar los ejes principales en la construcción del fenómeno regional. Sólo así podremos describir y caracterizar los nuevos regionalismos en Canadá. En ese sentido, hay que recalcar que tres son las dimensiones que nos permiten hablar de un Estado-región:

- En primer lugar, el nivel de interfaz internacional alcanzado por una provincia, no sólo a nivel de los intercambios comerciales, sino también de la gestión de los sistemas económicos y sociales. Lo anterior con miras a enfrentar la competencia internacional.
- En segundo lugar, el grado de complejidad alcanzado por la red de vínculos de instituciones y asociaciones públicas y privadas. Lo anterior con el objetivo de consolidar una economía que optimice las ventajas ligadas a los vínculos entre los actores.
- Finalmente, el nivel de éxito de las diferentes estrategias ejecutadas, en función con la construcción y la valorización de una ciudadanía y de una red de solidaridades regionales. Específicamente, este punto hace referencia a la legitimidad del gobierno regional como entidad encargada de la elaboración de derechos, responsabilidades y status de ciudadanía, sobre todo a nivel político y social.

En Canadá, las nuevas estrategias provinciales de desarrollo indican una gran variabilidad con respecto al modelo de Estado-región. Las especializaciones regionales, así como las desigualdades económicas, en materia de recursos y de experiencia acumulada, actúan como graves limitaciones que las provincias tratan de solventar. En ese sentido, Ontario y Quebec parecen haber avanzado más rápidamente en los tres ejes

---

<sup>3</sup> Ver Courchene y Telmer (1998), Wolfe (1998) y Vavakova y Wolfe (1999), para el caso de la provincia de Ontario.

anteriormente expuestos. Estas provincias son seguidas por Alberta y British Columbia; las otras provincias canadienses siguen de lejos.

Quebec y Ontario pueden, sin duda alguna, ser considerados como futuros "Estados-región". En el caso ontariense, es importante recalcar que la construcción de la economía regional está lejos de provocar un cuestionamiento del rol federal, al menos por parte de los grandes estratos de la población (Courchene y Telmer, 1998; Wolfe, 1997; Vavakova y Wolfe, 1999). Sin embargo, es importante destacar que existe un cambio a nivel de las representaciones, de forma tal que ya no existe una simetría "total" entre intereses económicos canadienses y ontarienses (Cameron, 1994; Bradford, 1998). Por su parte, Quebec se distingue, a nivel político, por haber construido un espacio privilegiado para la discusión de los grandes desafíos económicos y sociales (Jenson, 1995). En esta provincia, el aspecto político está más avanzado que la creación de un contexto económico propicio para la consolidación de redes (Bradford, 1998; Wolfe y Gertler, 1998; Latouche, 1998, Graefe, 2000). Por su parte, Alberta busca el margen de maniobra necesario para adoptar diversas políticas de intervención económica y social de tipo neoliberal, lo cual le permitiría posicionarse en el mercado internacional como un espacio de altas competencias y de bajos costos. Por ello, la provincia se opone a toda norma pan-canadiense o programa de redistribución que perjudique su proyecto. La provincia de Alberta muestra debilidades en el eje político, específicamente con respecto a la preponderancia del gobierno provincial como garante del progreso regional (Jang, 2000: B13). Las otras provincias tienen menos capacidad de movilización en torno a la modernización económica, aun cuando algunos intentos parciales han sido identificados en British Columbia, Saskatchewan y New Brunswick (Drache, 1999; Friesen, 1999; Rose, 1995). Es importante recalcar que, en el caso de las seis provincias más pequeñas de la federación, el desarrollo de este tipo de economía no producirá Estados-región, ya que estas carecen de los elementos necesarios para desarrollar estrategias regionales autónomas, fuera del marco federal. Ubicadas en un contexto de

dependencia, es evidente que no hay estímulos suficientes para desarrollar un espacio político regional, sobre todo si este va en detrimento de la legitimidad del gobierno federal.

### **La búsqueda de un federalismo funcional**

La globalización, con sus limitaciones gubernamentales subyacentes, plantean algunas interrogantes de suma importancia para el federalismo canadiense. El modelo de desarrollo del gobierno federal, que le da la primacía al mercado y al libre comercio, favoreció la fragmentación del espacio económico. Al mismo tiempo, algunas provincias aprovecharon los márgenes de maniobra creados por esta fragmentación con el fin de elaborar e implementar sus propias estrategias de desarrollo regional. Estas estrategias constituyen, hoy en día, un elemento central de los conflictos del régimen político federal (Bordie, 1989; Simeon y Robinson, 1990).

La búsqueda de una mayor competitividad económica puso en el tapete de discusión el valor de la eficacia y, consecuentemente, la búsqueda de un "federalismo funcional". El liderazgo del Estado está basado en su capacidad de movilización de los actores sociales, y de dirección de acciones concertadas (Jessop, 1997; Hollingsworth y Boyer, 1997). Desde este punto de vista, lejos de alimentar los desacuerdos, la problemática intergubernamental debería centrarse en el tema de la coordinación del trabajo de los dos niveles de gobierno. Si el potencial económico del Estado-región se desarrolla, la complementariedad entre el gobierno federal y los provinciales debería concretizarse, al menos en algunas esferas (Vavakova y Wolfe, 1999; Wolfe, 1997; Couchene y Telmer, 1998)<sup>4</sup>. Ahora bien: ¿Qué es lo que se necesita para ser funcional?

---

<sup>4</sup> Tomando en cuenta la revolución del saber y de la información, la acentuación de la integración norte-sur, la importancia que ocupan los mercados mundiales y las exigencias de la descentralización, Couchene afirma, por ejemplo, que una "unión socioeconómica interna necesita una combinación de esfuerzos de todos los niveles de gobierno". Esto debería provocar un fortalecimiento de las

Al respecto, se debe recordar que la definición de "funcional", en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (época del federalismo cooperativo), surgió del conflicto federal-provincial. Durante esa época, la estrategia del gobierno federal consistió en mezclar su preeminencia en materia de política social y su hegemonía centralizadora a nivel de política económica, desde una perspectiva de gestión macroeconómica de tipo tecnócrata y keynesiana. La oposición provincial rechazaba las propuestas centralizadoras de Ottawa. Finalmente, el mecanismo de programas a costos compartidos, considerado como el menos centralizador, se impuso como la forma por excelencia para establecer compromisos "funcionales" entre las competencias provinciales y el poder de gasto del gobierno federal. Este sistema caracterizó la vida política canadiense durante los veinte años posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Smiley, 1971). Con el tiempo, el gobierno federal se vio en la obligación de hacer concesiones a las provincias. Sin embargo, este mecanismo le brindó un instrumento para utilizar eficazmente su poder de gasto e influenciar, así, las prioridades provinciales y sus programas de acción (Smiley, 1971: 77-79; Morin, 1976: ch. 10). Quebec, seguido luego por las provincias del oeste, fue el que comenzó, en primer término, a aprovechar las "grietas" en el modelo y a poner en tela de juicio la jerarquía implícita del federalismo cooperativo (Jenson, 1989; Simeon y Robinson, 1990).

Actualmente, los excedentes presupuestarios federales y provinciales han incitado una nueva generación de iniciativas políticas. La pregunta central, que aparece nuevamente en los debates y discusiones, consiste en definir los mecanismos apropiados para traducir el compromiso federal-provincial a nivel político y social. El gobierno federal posee recursos fiscales importantes, pero el regreso al federalismo cooperativo no es una alternativa viable. La fragmentación económica incrementó la capacidad de acción de algunas provincias, haciendo prácticamente imposible el retorno al antiguo esquema jerárquico. Para el

---

redes entre los sistemas de relaciones interprovinciales y federales-provinciales

gobierno canadiense, ese tipo de federalismo es igualmente limitante. En el contexto actual, tres definiciones de un nuevo federalismo "funcional" están en discusión. Estas proposiciones no son el fruto de divagaciones teóricas. Por el contrario, son el resultado de estrategias gubernamentales reales. La primera se propone definir los mecanismos que permitirán a las provincias el hacerse responsables de lo que, en Canadá, se llama la unión social. La segunda intenta desconcentrar, de forma flexible, el gobierno federal, sin que este pierda su preponderancia. La tercera alternativa busca defender el principio federal de la división de las competencias constitucionales, entre el gobierno central, y las provincias (Boismenu y Jenson, 1998: 66-74).

### **Las provincias toman la responsabilidad**

Las provincias de mayor peso (particularmente Alberta y Ontario) han impulsado su propia propuesta de "modelo funcional". En este caso, la idea fundamental es la descentralización de la gestión política social para adaptarla a la fragmentación económica. Este proceso implica un desafío a la hegemonía sociopolítica del gobierno federal. Según esta perspectiva, plasmada en el documento ACCESS de Ontario, las provincias tomarían bajo su responsabilidad la gestión de la unión social y asegurarían un nivel de integración pan-canadiense.

De esta forma, las provincias podrían concebir sus propias políticas en función de sus desafíos económicos y sociales particulares, y en conformidad con las jurisdicciones de sus vecinos estadounidenses. Paralelamente, se evitarían los efectos negativos y las "externalidades" que esta diversidad podría provocar (Couchene, 1996: 80). La estrategia es funcional porque favorece la armonización de las políticas sociales con la economía regionalizada, utilizando al mismo tiempo las instituciones interprovinciales para minimizar las ineficiencias que podrían suscitarse. El plan implica un cuestionamiento de la

estructura jerárquica del federalismo canadiense, el cual utiliza los recursos financieros y su legitimidad frente a la ciudadanía para dirigir las actividades provinciales.

Evidentemente, la atribución de la gestión de una unión social descentralizada a un forum interprovincial reemplazaría una estructura jerárquica por otra, ya que los "banqueros" de la federación (Alberta y Ontario), estarían, probablemente, en posición de dominación con respecto a las otras provincias, lo cual les daría un amplio margen de maniobra para determinar los principios de deberían regir el sistema. Este escenario es sumamente atractivo para una provincia como Alberta, ya que se produciría una reducción de las trabas que limitan su accionar, al tiempo que delimitaría las capacidades de innovación política de las otras provincias. Por su parte, Ontario tendría un interés en el plan (Courchene y Telmer, 1998: 301) si este permite bloquear la influencia política de las provincias que defienden posiciones contrarias a los intereses ontarienses. En ese sentido, ACCESS es, sin duda alguna, un valioso instrumento.

Una unión social dirigida por las provincias de mayor peso les daría una capacidad para evitar que el dinero de sus contribuyentes sea redistribuido por el gobierno federal en otras provincias menos desarrolladas (Robson y Schwanen, 1999: 2, 4; Courchene y Telmer, 1998: 287-288). Si bien es cierto esta perspectiva reduce la magnitud de la injerencia federal en los campos de la jurisdicción provincial, esta habilita las instituciones interprovinciales para promulgar normas políticas, lo cual representa una afrenta a las concepciones clásicas del federalismo.

### **La desconcentración flexible con una preeminencia federal**

En contrapartida, el gobierno federal y las provincias menos desarrolladas proponen contrarrestar la fragmentación económica por medio de nuevas formas de centralización sociopolítica. Este plan implica formas descentralizadas de prestación de servicios, acompañadas por una standarización y una acentuación, relativamente importante, del rol de dirección del gobierno federal. La estrategia

puede ser considerada como la aplicación, en materia de gestión pública, de un tipo de gobernabilidad a múltiples niveles. En lugar de una división, a nivel federal, de poderes, lo que existiría es una división del trabajo, en donde el federal "pilotea" y las provincias "reman" (Noël, 2000b). Dicho de otro modo, podríamos afirmar que el gobierno federal estaría autorizado a utilizar sus recursos financieros y su legitimidad para "pagar el derecho de dirigir el timón", mientras que las provincias serían relegadas a los "remos". En términos más académicos, diremos que los signos de la descentralización federal en un cierto número de esferas, pueden ser interpretados como la demostración de una desconcentración, en el marco del control federal, de la concepción de los programas y de sus criterios de admisibilidad.

Esta estrategia es "funcional" porque mantiene los vínculos sociales pan-canadienses, a pesar de la fragmentación económica. También es funcional para las pequeñas provincias, las cuales reciben con beneplácito la dirección política federal, y el financiamiento asociado, con la condición de mantener la libertad y la flexibilidad para adaptar los programas a las exigencias sociales locales. Evidentemente, esta coincidencia entre los intereses federales y provinciales (en particular en las pequeñas provincias) no es absoluta. El modelo supone una multiplicidad de debates y de reivindicaciones provinciales en torno a la definición de los roles a seguir en el proceso de codirección para la elaboración de los estándares. Esta posición refleja un control federal más difuso que el que suponía la fórmula de programas de gastos compartidos. Sin embargo, el plan permite la reafirmación del rol de conducción del gobierno federal en materia de política social, y el desarrollo de la concepción federal pan-canadiense de ciudadanía social, aun cuando las desigualdades regionales, en esta materia, sean hoy más profundas (Boismenu y Jenson, 1998: 69, 75). En general, la estrategia consiste en la reafirmación de la supremacía federal. Es interesante hacer notar que a mediados de los años noventa, la puesta en marcha de la transferencia social canadiense, producto del referéndum quebequense de 1995, parecía anunciar un federalismo de colaboración, es decir, una visión de



"gobiernos trabajando juntos, sobre una base no jerarquizada, y de forma tal que su independencia pueda ser expresada" (Lazar, 1998b: 21).

### **El respeto del principio federal**

Finalmente, el gobierno de Quebec ha mantenido su apoyo al principio histórico federal y a la autonomía provincial como mejor forma de proteger su desarrollo nacional (Quebec, 1999: 2, 43). Esta posición lo deja fuera de las otras estrategias, ya que, en este caso, no se acepta la interferencia federal en las competencias provinciales. Desde este punto de vista, una federación "funcional" es aquella en donde cada gobierno provincial utiliza su autonomía constitucional para perseguir sus propias políticas económicas y sociales.

Desde 1960, esta perspectiva, asociada a la innovación política, le ha dado a esta provincia instrumentos adicionales en la consecución de sus objetivos (Gagnon, 1994). Durante las negociaciones sobre la unión social, el gobierno quebequense cedió en varios puntos. Sin embargo, se mantuvo firme en cuanto a la exigencia de poseer un derecho de retiro con compensación, lo cual le dió un margen de maniobra significativo para expresar su soberanía legislativa (Noël, 2000a; Québec, 1999: 38-39). Tal vez esta estrategia sea la más coherente para consolidar el Estado-región, aun cuando se dan pocos indicios con respecto a la forma de coordinar los esfuerzos con el gobierno federal, en aquellos tópicos en donde sea inevitable. Se puede pensar que la predilección de Ontario por la primer estrategia, en lugar de esta, refleja su reconocimiento de la legitimidad política del gobierno federal en el seno de la población ontariense. Esta perspectiva garantiza el reconocimiento de una ciudadanía social pan-canadiense compartida (ver Cameron, 1997), al tiempo que posibilita el ejercicio de su fuerza a lo interno de la federación, lo cual le daría cierto control sobre las acciones de las otras provincias (Couchene y Telmer, 1998).

## Conclusión

Los resultados de la interacción entre estas estrategias continúan siendo inciertos, en la medida en que las tensiones siguen caracterizando la vida política cotidiana en Canadá. El acuerdo de setiembre del 2000, en materia de salud, es la manifestación más reciente de esas tensiones y de la tendencia a "santificar" la división federal de competencias, antes de proceder a acuerdos basados sobre otros principios. También podemos observar estas tensiones en el rechazo provincial del unilateralismo de las políticas federales, sobre todo en lo concerniente a los minusválidos y en el repudio a practicar una concepción jerárquica del gobierno federal (Segal, 2000: 4).

Las discusiones en torno a la *Ley sobre la Prestación Nacional para la Infancia* y el acuerdo marco sobre la unión social indican que el "espacio de negociación" se ubica entre dos polos representados por cada una de las dos primeras estrategias. Específicamente, el acuerdo sobre la unión social es un indicador de esta tendencia. En este caso, algunos de los partidarios de ambas estrategias quedaron satisfechos, ya que este acuerdo es un paso hacia el futuro (Segal, 2000; Cameron y Rebrick, 1999)-, aun cuando otros lo criticaron enérgicamente, por cuando no es más que un retroceso (Robson y Schwanen, 1999; Barlow, 1999). En todo caso, en cuanto a nuestro análisis, lo importante no son los detalles precisos de un eventual compromiso. El punto central busca aclarar si los nuevos mecanismos de intervención federal en los campos de competencia provincial serán capaces de reforzar la centralización sociopolítica para contrarrestar la fragmentación económica, o si la ciudadanía social y política pan-canadiense será menos importante en un país más regionalizado. Aún cuando el acuerdo sobre la unión social parece expresar la voluntad del gobierno federal de reforzar la ciudadanía pan-canadiense (Noël, 2000a; 2000b), este tipo de compromisos puede enfrentar dos posibles contradicciones.

En primer lugar, los acuerdos alcanzados en ese "espacio de negociación" dejan de lado la cuestión del status de Quebec en el seno de la federación canadiense (Boismenu y Jenson, 1997; 1998). Al respecto, se puede defender

una visión optimista de la situación, afirmando que el marco de la unión social, orquestado por el gobierno federal, deja a Quebec por fuera. Las otras nueve provincias estarán cada vez más supeditadas a la supervisión federal, a los acuerdos interprovinciales y, tal vez, a la imputabilidad frente al gobierno federal. Sólo Quebec permanecerá al margen, con su integridad jurisdiccional intacta (Gibbins, 1999: 216-217). Sin embargo, es más probable que Quebec se vea afectado por este acuerdo y por los efectos negativos del reconocimiento del poder de gasto federal. Lo anterior es especialmente cierto si recordamos que esta provincia deberá seguir las líneas generales de las políticas elaboradas a través el proceso de unión social (Noël, 2000b, 13-15). A menos que las especificidades de Quebec sean reconocidas durante dicho proceso, los esfuerzos de Quebec para crear un espacio económico y político autónomo serán irreconciliables con los modos de coordinación pan-canadiense que están en discusión (Cameron, 1997).

En segundo lugar, no existe garantía alguna que los acuerdos alcanzados a través de estos nuevos mecanismos producirán los resultados deseados por el gobierno federal o por las provincias. Los acuerdos realizados en el marco de esos foros han producido, o pueden producir, políticas muy limitadas. Las disposiciones incluidas en el acuerdo sobre la unión social favorecen la utilización de programas de prestación dirigidos a los individuos, por medio del sistema de transferencias fiscales. El acuerdo da mucha más importancia a este aspecto que a la creación de instituciones basadas en el modelo de servicios específicos en función de las comunidades de base (Noël, 2000a: 29-30; 2000b: 16-17). En el caso de la Prestación nacional la Infancia, tema prioritario de un acuerdo intergubernamental, se puso en ejecución un destejido mecanismo innovador en política social (Boychuck 2000, 47), es decir, una definición más precisa del problema a tratar. Esta estrategia permitió encontrar soluciones específicas al "más bajo denominador común". Se aseguró, de esta forma, la aceptación de las provincias, particularmente las de Alberta y Ontario. Un estudio cuidadoso del cuarto informe del Consejo de Primeros Ministros de las

Provincias y Territorios (1999) demuestra la importancia que han adquirido los temas de proceso y coordinación, en detrimento de la elaboración de políticas.

Este tipo de soluciones pueden ser insuficientes, a largo plazo, para consolidar la centralización social y política perseguida por el gobierno federal. Según Boychuk, en el nuevo enfoque de la unión social, no se sabe con certeza en donde está la "unión", ya que no existe ninguna incitación de coordinación interprovincial. De hecho, cada provincia sigue más o menos su propia agenda política e ideológica (Boismenu y Jenson, 1998). Al mismo tiempo, las políticas limitadas, y obstaculizadas por la unión social, pueden ser insuficientes para establecer una red integrada de instituciones y de prácticas compartidas, elemento subyacente al modelo de Estado-región. Además, se incrementa la marginalización de la provincia de Quebec. Si Ontario logra constituirse en Estado-región, es posible que la pregunta de fines de los años ochenta y principios de los noventa vuelva a ser planteada, a saber: ¿Cómo continuar una modernización social frente a políticas federales residuales (ver *l'Ontario*, 1987)?

Actualmente, estamos frente a un cambio en la forma de reproducción de la hegemonía del gobierno federal. Habiendo optado por una política económica de libre comercio, que satisface las demandas de la élite económica pero que favorece la fragmentación del espacio canadiense, el gobierno federal no ha sido capaz de establecer políticas capaces de contrarrestar estas tendencias. Por su parte, la fragmentación es impulsada por el carácter paradójico de las políticas federales, las limitaciones que el propio gobierno ha aceptado en el contexto de la globalización, y la resistencia de algunas provincias a la jerarquía federal. Actualmente, el gobierno central tiene en sus manos una as fundamental: su gran legitimidad como garante de la ciudadanía social canadiense. Queda por verse si la carta de la unión social será lo suficientemente eficaz para ganar la apuesta.

## Bibliografia

- Bakvis, Herman (1996) « Federalism, New Public Management, and Labour-Market Development.» In Patrick C. Fafard and Douglas M. Brown (eds) *Canada: The State of the Federation 1996*. Kingston: Institute of Intergovernmental Relations. pp. 135-65.
- Barlow, Maude (1999) « Surgery by Social Union: Social Union could end up killing off what the federal budget was supposed to save» *Canadian Perspectives* Spring, available at <http://www.canadians.org/campaigns/campaigns-socialpub02.html>, 3pp.
- Blank, Stephen, Stephen Krajewski with Henry S. Yu (1995) « U.S. Firms in North America: Redefining Structure and Strategy.» *North American Outlook* 5:2, 5-71.
- Boismenu, Gérard and Jane Jenson (1998) « A Social Union or a Federal State? Competing Visions of Intergovernmental Relations in the New Liberal Era.» In Leslie A. Pal (ed.) *How Ottawa Spends 1998-99, Balancing Act: The Post-Deficit Mandate*. Toronto: Oxford University Press. pp. 57-79.
- Boismenu, Gérard and Jane Jenson (1997) « La dislocation du régime de citoyenneté canadien et l'évolution du régime fédératif.» *Cahiers d'histoire* 17:1-2, 126-146.
- Boyчук, Gerard W. (2000) « SUFA, the child benefit and social assistance.» *Policy Options* April, 46-47.
- Bradford, Neil (1999) « The Policy Influence of Economic Ideas: Interests, Institutions and Innovation in Canada.» *Studies in Political Economy* 59, 17-60.
- Bradford, Neil (1998) « Prospects for Associative Governance: Lessons from Ontario, Canada.» *Politics and Society* 26:4, 539-573.
- Brodie, Janine (1989) *The Political Economy of Canadian Regionalism*. Toronto: Harcourt, Brace and Jovanovich.

- Brodie, Janine and Malinda Smith (1998) « Regulating the Economic Union,» In Leslie A. Pal (ed.) *How Ottawa Spends 1998-99 -- Balancing Act: The P<sup>O</sup>st-Deficit Mandate*. Ottawa: Carleton University Press. pp. 81-97.
- Brown, David (1998) « Why is the nation-state so vulnerable to ethnic nationalism?» *Nations and Nationalism* 4:1, 1-15.
- Cameron, Barbara (1997) *Rethinking the Social Union: National Identities and Social Citizenship*. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives. 24 pp.
- Cameron, Barbara and Judy Rebick (1999) « The Social Union Framework is a step forward.» *The Globe and Mail*, February 8, A13.
- Cameron, David R. (1994) « Post-Modern Ontario and the Laurentian Thesis.» In Douglas M. Brown and Janet Hiebert (eds) *Canada: The State of the Federation 1994*. Kingston: Institute of Intergovernmental Relations. pp. 109-132.
- Campbell, Robert M. (1992) « Jobs... Job... Jo... J... The Conservatives and the Unemployed.» In Frances Abele (ed.) *How Ottawa Spends 1992-93: The Politics of Competitiveness*. Ottawa: Carleton University Press. pp. 23-55.
- Cooke, Philip (1998) « Introduction: Origins of the Concept.» In Hans-Joachim Braczyk, Philip Cooke and Martin Heidenreich (eds) *Regional Innovation Systems: The role of governances in a globalized world*. London: UCL Press. pp. 2-25.
- Coulombe, Serge (1998) -- C.D. Howe Commentary paper...
- Courchene, Thomas J. (1996) « ACCESS: A Convention on the Canadian Economic and Social Systems.» In *Assessing ACCESS: Towards a New Social Union*. Kingston: Institute of Intergovernmental Relations. pp. 77-112.
- Courchene, Thomas and Colin R. Telmer (1998) *From Heartland to North American Region State: The Social, Fiscal and Federal Evolution of Ontario*. Toronto: Centre for Public Management.
- Doern, G. Bruce and Mark MacDonald (1997) « The Liberals' Internal Trade Agreement: The Beginning of a New Federal Assertiveness?» In Gene

- Swimmer (ed.) *How Ottawa Spends 1997-1998*. Ottawa: Carleton University Press. pp. 135-58.
- Drache, Daniel (1999) Article in *Regional and Federal Studies* 9:3
- Friesen, Gerald (1999) *The West: Regional Ambitions, National Debates, Global Age*. Toronto: Penguin.
- Gagnon, Alain-G (1994) « Quebec: Variations on a Theme.» In James Bickerton and Alain-G. Gagnon (eds) *Canadian Politics, second edition*. Peterborough: Broadview.
- Gibbins, Roger (1999) « Taking Stock: Canadian Federalism and Its Constitutional Framework.» In Leslie A. Pal (ed.) *How Ottawa Spends 1999-2000, Shape Shifting: Canadian Governance Toward the 21st Century*. Don Mills: Oxford University Press. pp. 197-220.
- Graefe, Peter (2000) « The High Value-Added, Low-Wage Model: Progressive Competitiveness in Québec from Bourassa to Bouchard.» *Studies in Political Economy* 61, 5-30.
- Haddow, Rodney (2000) « The Variable Prospects for Corporatism in Canada: Lessons about structure and agency from the labour market sector in three provinces,» Paper delivered at the annual meeting of the Canadian Political Science Association, Québec City, August 1.
- Haddow, Rodney (1998) « How Ottawa Shrinks: Ottawa's Declining Role in Active Labour Market Policy.» In Leslie Pal (ed) *How Ottawa Spends 1998-99. Balancing Act: The Post-Deficit Mandate*. Ottawa: Carleton University Press. pp. 99-126.
- Haddow, Rodney and Andrew Sharpe (1997) « La Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre: A Postscript.» In Andrew Sharpe and Rodney Haddow (eds) *Social Partnerships for Training: Canada's Experiment with Labour Force Development Boards*. Kingston: School of Policy Studies. pp. 147-54.

- Haslam, Paul (1999) « Globalization and Effective Sovereignty: A Theoretical Approach to the State in International Political Economy.» *Studies in Political Economy* 58, 41-68.
- Hollingsworth, J. Rogers and Robert Boyer (1997) « Coordination of Economic Actors and Social Systems of Production.» In J. Rogers Hollingsworth and Robert Boyer (eds.) *Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1-47.
- Hueglin, Thomas O. (1989) « Better Small and Beautiful than Big and Ugly? Regionalism, Capitalism and the Postindustrial State.» *International Political Science Review* 10:3, 209-221.
- Jang, Brent (2000) « Memories of National Energy Programme haunt Liberals still.» *The Globe and Mail* October 24, B13.
- Jenson, Jane (1995) « Mapping, naming and remembering: globalization at the end of the twentieth century.» *Review of International Political Economy* 2:1, 96-116.
- Jenson, Jane (1989) « 'Different' but not 'exceptional': Canada's permeable Fordism.» *Canadian Review of Sociology and Anthropology* 26:1, 69-94.
- Jessop, Bob (1997) « Capitalism and its future: remarks on regulation, government and governance.» *Review of International Political Economy*, 4:3, 561-581.
- Kagarlitsky, Boris (1999) « The Challenge for the Left: Reclaiming the State.» In Leo Panitch and Colin Leys (eds) *The Socialist Register 1999*. London: Merlin. pp. 294-313.
- Karmis, Dimitrios and Alain-G. Gagnon (1996) « Fédéralisme et identités collectives au Canada et en Belgique: des itinéraires différents, une fragmentation similaire.» *Canadian Journal of Political Science* 29:3, 435-468.
- Keating, Michael (1998) *The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change*. Cheltenham: Edward Elgar.



- Langille, David (1987) « The Business Council on National Issues and the Canadian State.» *Studies in Political Economy* 24, 41-85.
- Latouche, Daniel (1998) « Do regions make a difference: The case of science and technology policies in Quebec.» In Hans-Joachim Braczyk, Philip Cooke and Martin Heidenreich (eds) *Regional Innovation Systems: The role of governances in a globalized world*. London: UCL Press. pp. 319-44.
- Lazar, Harvey (1998a) « The Federal Role in a New Social Union: Ottawa at a Crossroads.» In Harvey Lazar (ed.) *Canada: The State of the Federation 1997 -- Non-constitutional renewal*. Kingston: Institute of Intergovernmental Relations. pp. 105-136.
- Lazar, Harvey (1998b) « Non-Constitutional Renewal: Toward a New Equilibrium in the Federation.» In Harvey Lazar (ed.) *Canada: The State of the Federation 1997-- Non-constitutional renewal*. Kingston: Institute of Intergovernmental Relations. pp. 3-35.
- Leslie, Peter (1987) *Federal State, National Economy*. Toronto: University of Toronto Press.
- Lovering, John (1999) « Theory Led by Policy: The Inadequacies of the 'New Regionalism' (Illustrated from the Case of Wales)» *International Journal of Urban and Regional Research* 23:2, 379-395.
- Maxwell, Judith (2000) « Le Québec et la nouvelle économie: avons-nous de quoi nous réjouir? » *La minute de l'emploi* 3:8, 5-6.
- McBride, Stephen, and John Shields (1997). *Dismantling a Nation: The Transition to Corporate Rule in Canada*. Halifax: Fernwood.
- Milne, David (1986) *Tug of War: Ottawa and the Provinces Under Trudeau and Mulroney*. Toronto: Lorimer.
- Morin, Claude (1976) *Quebec versus Ottawa: The Struggle for Self-Government 1960-72*. Toronto: University of Toronto Press.
- Noël, Alain (2000a) « General Study of the Framework Agreement.» In Alain-G. Gagnon and Hugh Segal (eds.) *The Canadian Social Union Without Quebec*. Montréal: IRPP. pp. 9-35.

- Noël, Alain (2000b) « Without Quebec: Collaborative Federalism with a Footnote? » *IRPP Working Paper*, 1:2, March, 19pp.
- Ontario. Ministry of Intergovernmental Affairs (1987) *Federalism Forecast 1987-88*. Internal Document, September.
- Panitch, Leo (1994) « Globalization and the State. » In Ralph Miliband and Leo Panitch (eds) *The Socialist Register 1994*. London: Merlin.
- Provincial-Territorial Council on Social Policy Renewal (1999) *Report#4 Progress Report to Premiers*. Québec, August.
- Québec, Ministère des finances (1998) *Québec objectif emploi -- Vers une économie d'avant garde: Une stratégie de développement économique créatrice d'emplois*. Québec: Ministère des finances, March.
- Québec, Ministère du Conseil exécutif (1999) *Québec's Political and Constitutional Status: An Overview*. Québec: Ministère du Conseil exécutif.
- Robinson, Ian (1995) « Trade Policy, Globalization and the Future of Canadian Federalism. » In François Rocher and Miriam Smith (eds.) *New Trends in Canadian Federalism*. Peterborough: Broadview. pp. 234-269.
- Robson, William B.P. and Daniel Schwanen (1999) « The Social Union Agreement: Too Flawed to Last. » *C.D. Howe Institute Backgrounder*, February 8, 5pp.
- Rocher, François and Christian Rouillard (1999) « The Impact of Continental and Global Integration on Canadian Federalism: We Can't Have Our Cake and Eat it Too. » Paper presented at the Annual Meeting of the Canadian Political Science Association, Sherbrooke, June 1999.
- Rocher, François et Christian Rouillard (1998) « Décentralisation, subsidiarité et néo-libéralisme au Canada: lorsque l'arbre cache la forêt. » *Analyse de politiques*, 24:2, 233-258.
- Rose, Jonathan W. (1995) « The Selling of New Brunswick: Fibre Optics or Optical Illusion. » In Douglas M. Brown and Jonathan W. Rose (eds) *Canada: The State of the Federation 1995*. Kingston: Institute for Intergovernmental Relations. pp. 171-187.

- Russell, Bob (1999) *More With Less*. Toronto: University of Toronto Press.
- Savoie, Donald (1995) « Regional Development: A Policy for All Seasons.» In François Rocher and Miriam Smith (eds) *New Trends in Canadian Federalism*. Broadview: Peterborough. pp. 369-390.
- Schwartz, Bryan (1995) « Assessing the Agreement on Internal Trade: The Case for a 'More Perfect Union.' » In Douglas M. Brown and Jonathan W. Rose (eds) *Canada: The State of the Federation 1995*. Kingston: Institute for Intergovernmental Relations. pp. 189-217.
- Segal, Hugh D. (2000) « Beyond the Vertical and Horizontal Hold: the Challenge of Practical Collaboration.» Dinner keynote, Saskatchewan Institute of Public Policy Forum/Conference, Thursday, February 3, 7pp.
- Smiley, Donald V. (1971 [1962]) « The Rowell-Sirois Report, Provincial Autonomy and Post-War Canadian Federalism.» In J. Peter Meekison (ed.) *Canadian Federalism: Myth or Reality, second edition*. Toronto: Methuen. pp. 66-82.
- Simeon, Richard and Ian Robinson (1990) *State, Society and the Development of Canadian Federalism*. Toronto: University of Toronto Press.
- Stanford, Jim (1999) *Paper Boom: Why Real Prosperity Requires a New Approach to Canada's Economy*. Toronto: Lorimer.
- Théret, Bruno (2000) « La mondialisation comme discours organisateur d'une stratégie d'État: L'exemple du Canada.» *Les Temps Modernes* 607, 77-96.
- Vavakova, Blanka and David A. Wolfe (1999) « Regional Innovation Policy: Rhône-Alpes and Ontario.» *Regional and Federal Studies* 9:3, 107-129.
- Wolfe, David A. (1997) « The Emergence of the Region State.» In Thomas J. Courchene (ed.) *The Nation State in a Global/Information Era: Policy Challenges*. Kingston: John Deutsch Institute for the Study of Economic Policy. pp. 205-240.
- Wolfe, David and Meric Gertler (1998) « The regional innovation system in Ontario.» In Hans-Joachim Braczyk, Philip Cooke and Martin Heidenreich (eds) *Regional Innovation Systems: The role of governances in a globalized world*. London: UCL Press. pp. 99-135.

